

sanción de un nuevo Código Civil y Comercial planteó una serie de cambios de paradigmas que no logra cuajar adecuadamente con una ley añosa como la 17.418.

Por lo que pensamos, poco podrá hacer nuestra actual ley frente a los desafíos que plantea la revolución de los datos y la inteligencia artificial.

Sin ánimos de ser exhaustivos, entendemos que los principales puntos por reflexionar tienen que ver con: a) la denuncia de siniestro, b) la reticencia y agravación, c) fijación de la prima, y d) resignificación de la figura del *riesgo* en el contrato⁽¹³⁾.

En la etapa de denuncia de siniestro, los arts. 46 y 47 de la LS imponen al asegurado la carga de denunciar dentro de las 72 horas de producido el hecho dañoso previsto en el contrato. La falta de denuncia, su cumplimiento tardío o el incumplimiento de suministrar información complementaria le acarrea la caducidad de su derecho a ser indemnizado.

Ahora bien, el art. 48 de la LS también establece la pérdida del derecho del asegurado en caso de dolo en la inobservancia de lo estipulado por el art. 46 –2º párrafo–, es decir, en el suministro de información complementaria, exageración fraudulenta de los daños o empleo de pruebas falsas.

La incorporación de sistemas de IA y dispositivos telemáticos a las pólizas que cubren daños patrimoniales o seguros de personas permiten un *trackeo* en tiempo real de riesgo amparado.

Por lo cual, siendo de aplicación el actual art. 15 de la LS⁽¹⁴⁾, no es posible jurídica ni fácticamente que la compañía de seguros pueda alegar la falta de conocimiento del acaecimiento del evento dañoso y toda la información relevante del caso. Incluso sería muy complejo para el asegurado incurrir en una conducta dolosa cuando dichos instrumentos transmiten información y datos directamente al asegurador.

Asimismo, la normativa referida a la reticencia (arts. 5º y 6º de la LS) y la agravación del riesgo (arts. 37 a 45 de la LS) establecen sanciones aplicables al asegurado con relación a toda aquella declaración falsa, omisión u ocultamiento de información pertinente para el asegurado respecto al riesgo, o su posterior agravación.

Como se ha señalado anteriormente, el uso de dispositivos telemáticos y sistemas de IA ponen a ciertos

institutos en crisis, ya que el asegurador no podrá alegar reticencia o agravación del riesgo cuando tiene en su poder información en tiempo real sobre las circunstancias relevantes del riesgo asegurado.

Asimismo, las medidas preventivas desplegadas por el asegurado haciendo uso de métodos de prevención, como *el nudge* o *gaming*, o cualquier ejecución de conductas deseables que disminuyan el riesgo, necesariamente deberá importar un reajuste de primas según vayan variando las condiciones de asegurabilidad del riesgo (art. 34 de la LS).

Por último, el uso de sistemas de inteligencia artificial que permiten conocer al detalle el riesgo y su probabilidad de ocurrencia, por lo que algunos autores comienzan a preguntarse si ¿es posible afirmar que en un futuro no muy cercano la IA evitará la causación de todo daño y, con ello, la posibilidad de la ocurrencia del evento dañoso pactado en el contrato de seguros?⁽¹⁵⁾

El interrogante planteado encuentra más dudas que certezas. Sin embargo, entendemos que el aprovechamiento de datos y sistemas de inteligencia artificial, cada vez más complejos y omniscientes, reconvertirán el contrato de seguros en una especie de contrato con características particulares, pero que no encuadrarían en el concepto actual de contrato aleatorio.

5. Palabras finales

Las nuevas tecnologías requieren adaptabilidad y reinención en las empresas de seguros, ya que imponen un cambio de paradigma. Seguramente, pasarán a la historia viejas modalidades en distribución de seguros, de contratación, gestión de riesgos, y liquidación de siniestros; pero aparecerán nuevas oportunidades que hoy en día quizás ni siquiera podemos imaginar. Nuestra añosa Ley de Seguros ha cumplido un ciclo, nos merecemos repensar los viejos institutos en una reforma que exprese los paradigmas del Seguro 4.0.

VOCES: SEGURO - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - RESPONSABILIDAD CIVIL - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - CONTRATO DE SEGUROS - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - TECNOLOGÍA - OBLIGACIONES - DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO - ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS - GRUPOS ECONÓMICOS - PERSONAS JURÍDICAS - SINIESTRO - ASEGURADORA - CLÁUSULAS CONTRACTUALES

(15) VEIGA COPO, Abel, “Seguro y tecnología. El impacto de la digitalización en el contrato de seguro”, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Madrid, e-book- RB-1.7. COLOMBO, María Celeste, “Perspectivas y desafíos para una futura reforma: la Ley de Seguros 4.0”, La Ley, 6/9/2022, 9. Cita: TR LALEY AR/DOC/2625/2022.

(13) Cfr. COLOMBO, María Celeste, “Perspectivas y desafíos para una futura reforma: La Ley de Seguros 4.0”, La Ley, 6/9/2022, 9. Cita: TR LALEY AR/DOC/2625/2022.

(14) El art. 15 de la LS establece que, si el asegurador toma conocimiento del siniestro y sus circunstancias, no puede invocar ninguna consecuencia desventajosa para el asegurado con relación a la falta o denuncia tardía del siniestro y/o información complementaria.

El Derecho de Seguros a 55 años de la sanción de la ley de contrato de seguro. Apuntes sobre la necesidad de una reforma

por MARÍA FABIANA COMPIANI(*)

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. – II. ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. II.1. LA SEVERA SANCIÓN ANTE LA RETICENCIA CULPABLE. II.2. LA NECESIDAD DE UNA DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS INFLUYENTES SOBRE EL RIESGO A TRAVÉS DE UN CUESTIONARIO SUMINISTRADO POR EL ASEGURADOR. II.3. LA PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE SEGUROS. II.4. LA RESCISIÓN ANTE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO. II.5. LA SANCIÓN POR FALTA DE DENUNCIA DEL SINIESTRO O DENUNCIA TARDÍA. – III. COROLARIO.

I. Introducción

Promediaba el año 1958 cuando el Poder Ejecutivo Nacional le encargó al Prof. Dr. Isaac Halperin la redacción

de un Anteproyecto de Ley de Seguros, el que fue presentado por su autor el 9 de junio de 1959. Aun antes de su presentación, el propio Poder Ejecutivo designó una

factor de atribución en el Código Civil y Comercial, por CARLOS A. GHERSI, ED, 267-878; *Los supuestos expresamente contemplados en el nuevo Código que eximen –total o parcialmente– la atribución de la responsabilidad*, por JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FREIRE, ED, 274-813; *Apuntes en torno a las medidas mitigadoras en el Código Civil y Comercial argentino, con especial atención a la responsabilidad civil por incumplimiento contractual*, por DANIEL L. UGARTE MOSTAJO, ED, 275-504; *Criterios de atribución de responsabilidad civil. Razones de su evolución desde Vélez Sarsfield hasta el Código Civil y Comercial*, por FERNANDO ALFREDO UBIRIA, ED, 277-724; *Ilegalidad de la suspensión automática de cobertura por mora en el pago de seguro*, por PABLO FERNANDO CEBALLOS CHIAPPERO, ED, 284-52, *Apuntes sobre la responsabilidad civil del productor asesor de seguros*, por MARÍA CELESTE COLOMBO, ED, 292; *La responsabilidad civil del productor asesor de seguros. Marco regulatorio aplicable*, por MARÍA FABIANA COMPIANI, ED, 296. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderechodigital.com.ar.

(*) Profesora Adjunta regular por concurso de la asignatura Obligaciones Cíviles y Comerciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Expresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Seguro, rama nacional de AIDA. Vicepresidente del CILA (Comité Iberoamericano de Derecho de Seguros). Autora de artículos e investigaciones en Derecho de Daños, del Consumidor y de Seguros.

NOTA DE REDACCIÓN: SOBRE el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en EL DERECHO: *Reciente plenario de la Cámara Civil y los seguros*, por CARLOS SCHWARZBERG, ED, 233-629; *Reflexiones derivadas de ciertos aspectos del siniestro y reparos doctrinarios que me aparecen de la interpretación de la Excm. Cámara en lo Comercial*, por EMILIO H. BULLO, ED, 236-1077; *Seguro de responsabilidad civil. Citación en garantía. Dirección del proceso. El depósito en pago de la suma asegurada y accesorias devengadas, ¿libera al asegurador citado en garantía?*, por CARLOS ALBERTO SCHIAVO, ED, 244-1039; *Sistema de*

Comisión Asesora, Consultiva y Revisora que fue la encargada de revisar el mencionado Anteproyecto, y entregó su trabajo en 1961. El informe de la Comisión no fue considerado sino hasta 1967, oportunidad en la cual una nueva Comisión encargada por el Ministro de Justicia revisó el texto del Anteproyecto Halperin modificado por la primera Comisión revisora.

Como resultado del trabajo de esta segunda Comisión, se alumbró la promulgación de la ley 17.418, el 30 de agosto de 1967 (LS). Si bien su publicación en el Boletín Oficial aconteció el 6 de setiembre 1967, y su art. 163 disponía su vigencia a partir de los 6 meses desde tal fecha, la ley 17.661 prorrogó ese plazo, lo que determinó que comenzara a regir a partir del 1º de julio de 1968⁽¹⁾.

Transcurridos 55 años de su promulgación y más de 60 del Anteproyecto Halperin que sirvió de antecedente, la doctrina y los Tribunales han unificado algunos de los criterios interpretativos relativos a la ley que regula el contrato de seguro en nuestro país, por ejemplo, con relación al funcionamiento de la citación en garantía del asegurador del riesgo de la responsabilidad civil en el proceso de daños promovido por el damnificado, al otorgarle carácter de parte procesal con plenas facultades⁽²⁾.

Sin embargo, con relación a otros institutos, se suscitan debates interminables respecto a la aplicación de soluciones aportadas por la ley de contrato de seguro que se perciben como injustas. A modo de ejemplo, la polémica acerca de la solución de aceptación tácita por el asegurado cuando el texto de la póliza difiere de la propuesta del contrato (art. 12 LS), la suspensión de cobertura automática en caso de falta de pago de la prima en plazo (art. 31 LS –según alguna doctrina y jurisprudencia, se requeriría un aviso del asegurador para hacer operativa la suspensión–), la razonabilidad de algunos límites económicos del seguro de responsabilidad civil (franquicias exorbitantes, sumas aseguradas afectadas por la depreciación de la moneda), la validez de algunas exclusiones de cobertura (art. 1121 CCyCN excluye de la declaración de cláusulas abusivas a las relativas a la relación precio o bien o servicio procurado), o su funcionamiento independientemente de la vinculación causal con el siniestro (técnicamente, la exclusión tiene que estar en relación causal con el riesgo de modo de alterar el cálculo de frecuencia o intensidad de este), el plazo de prescripción aplicable (art. 58 LS); estos son solo algunos ejemplos de una judicialidad en alza en materia de seguros.

Muchos de esos problemas hoy se ventilan con relación al seguro obligatorio automotor que representa casi un 40 % del sistema de seguros en nuestro medio, concentra el 61 % de las pólizas emitidas, y el 69 % de los siniestros atendidos por las aseguradoras⁽³⁾. La carencia de una verdadera ley de seguro obligatorio automotor coloca bajo estrés una cobertura que exhibe la tensión existente entre la necesidad de amparo oportuno y suficiente de las víctimas de un flagelo de los accidentes de tránsito que produce más de 6.000 muertes año y constituye la primera causa de muerte de jóvenes en nuestro país,⁽⁴⁾ y los límites de un seguro concebido en la legislación de seguros como un amparo al patrimonio del asegurado (art. 109, ley de seguros)⁽⁵⁾.

Esta situación aumenta la inseguridad jurídica, nutre un creciente aumento de los costos de los reclamos, dificulta la transacción y conspira contra una eficiente gestión del riesgo en la industria del seguro.

El panorama descrito se extiende a todo el seguro de responsabilidad civil, de allí a otros riesgos, tanto del seguro patrimonial como del seguro voluntario, y no solo torna recomendable la actualización de las soluciones que aporta la ley de contrato de seguro, sino que la convierte en imperiosa si le sumamos la necesidad de armonizarla con las soluciones del Código Civil y Comercial de la Nación que le resultan aplicables, tanto por tratarse de un contrato celebrado por adhesión a condiciones generales de contratación como por tratarse de un contrato de consumo cuando se celebra o usa con destino final de consumo propio, familiar o social⁽⁶⁾.

La reforma de la Ley de Seguros se justifica también porque la necesidad del tráfico comercial ha impuesto la oferta de nuevas coberturas para riesgos no regulados, lo que conviene remediar en la reforma legislativa, ya que en muchas ocasiones la póliza es copia de la vigente en otros países, la terminología utilizada no es de recibo en nuestro sistema jurídico, y genera disputas en cuanto a la aplicación de soluciones generales previstas en la ley para seguros patrimoniales (por ejemplo, en materia de seguro de caución, la inaplicabilidad de la suspensión de cobertura por falta de pago).

La modificación debería servir, en suma, para actualizar las modalidades más recientes de contratación, a través de medios electrónicos de las coberturas individuales y colectivas de seguros, tanto patrimoniales como de personas. En ese orden, además, deberían regularse bajo una normativa común el seguro obligatorio, más allá de la que específicamente corresponda a las modalidades asegurativas coercitivas, como el seguro automotor, el seguro ambiental, de los titulares de establecimientos educativos⁽⁷⁾, seguro de caución para adquirentes de unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal⁽⁸⁾, entre otros; debería realizarse una mejor y más precisa regulación del contrato de reaseguro y una correcta regulación del procedimiento de liquidación de las empresas de seguros, así como la actualización normativa de lo referente a las modernas técnicas de comercialización del seguro⁽⁹⁾.

II. Algunas de las modificaciones necesarias

Los viejos temas que han merecido la atención de la doctrina y que justifican su modificación⁽¹⁰⁾, sin que deba interpretarse por ello que son las únicas relevantes, son los siguientes:

II.1. La severa sanción ante la reticencia culpable

No se explica la severidad del régimen vigente que le permite al asegurador peticionar la anulación del contrato, aun en caso de reticencia culpable.

La modificación debería orientarse a mantener vivo el contrato y permitir al asegurador adecuar la prima al verdadero estado del riesgo, así como cubrir el siniestro prorrateando la indemnización con relación a la prima que el asegurado hubiera debido pagar según el real estado del riesgo.

No debería desaprovecharse la oportunidad para aclarar tanto que el plazo de tres meses con el que cuenta el asegurador lo es para peticionar la anulabilidad del contrato (la redacción actual señala controversialmente “impugnar” el contrato), como la experticia de un contador público para producir el juicio de peritos, exigido para

(1) STIGLITZ, Rubén S., *Derecho de Seguros*, 6ª ed. act. y ampl., tomo I, Thomson Reuters, La Ley, Buenos Aires, 2016, Prólogo a la quinta edición, XXV.

(2) CSJN, “Lanza Peñaranda, R.A. c. Transportes Quirno Costa S.A.”, 27/11/90, Fallos: 313:1267, JA, 1991-II-313; CNCiv. en pleno, “Flores O. c. Robazza, M.”, 23/9/91, DJ, 1992-4:385; SCJ Buenos Aires, en las causas, “Centeno”, “Mufarell” y “Silione”, 10/6/97, ILBA, 1997-1102. COMPIANI, María F., “Reflexiones en torno a la citación en garantía del asegurador”, en RAMÍREZ BERNAL, M. Sandra y JARAMILLO, Carlos J. (Dir.), *Derecho de Seguros, Liber Amicorum* en homenaje al maestro Rubén S. Stiglitz, II Editores, 2020, pp. 137-151.

(3) Las aseguradoras pagaron más de 2.5 millones de siniestros en automotores, con una participación de casi el 69 % del total en un año. Autos concentra el 61 % de las pólizas emitidas por el mercado de seguros en igual período. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA, PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, *Situación del mercado asegurador. Al 30 de junio de 2022*. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/04/ssn_sit_merc_asegurador241022_anexo.pdf (fecha de consulta: 4/11/2022).

(4) Véase, en este sentido, LUCHEMOS POR LA VIDA, Asociación Civil, “Muertos en Argentina durante 2019”, disponible en: <https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-argentina-2019> [cifras anteriores a la pandemia, fecha de consulta: 4/11/2022].

(5) COMPIANI, María F. y FACAL, Carlos J. M., “Problemática en torno a la limitación de la prestación en los seguros de responsabilidad civil”, *Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros*, núm 47, 2018, pp. 15-75. DOI <https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris47.ptla>.

(6) COMPIANI, María F., “El contrato de seguro en el Código Civil y Comercial”, LA LEY 2014-F, 662, cita: TR LALEY AR/DOC/3823/2014.

(7) COMPIANI, María F., “El seguro obligatorio de responsabilidad civil de los establecimientos educativos en argentina”, en AA. VV., *Direito do Seguro Contemporâneo: edição comemorativa dos 20 anos do IBDS*, 2 vol., Contracorrente, San Pablo, Brasil, 2021, parte II, cap. XIV.

(8) COMPIANI, María F., “Aseguramientos en los desarrollos inmobiliarios para el consumo”, en ALTERINI, Ignacio E. y AICEGA, María V. (Dirs.), *Derecho de consumo inmobiliario*, tomo I, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2021, p. 341.

(9) LÓPEZ BUSTABAD, Ignacio J., “Los comparadores de seguros: ¿Informadores, distribuidores o mediadores de seguros?”, en BATALLER GRAU, Juan y QUINTÁNS EIRAS, María del Rocío (Dirs.), *La distribución de seguros privados*, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 411.

(10) COMPIANI, María F., “El régimen jurídico del contrato de seguro en el derecho argentino. Actualidad y perspectivas”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, IDIBE, núm. 5 ter, dic. 2016.

acreditar que la circunstancia –dolosa o por culpa grave– omitida o reticente por el asegurado, era determinante para que el asegurador no contratara o lo hiciera bajo condiciones diferentes a lo acordado.

Por otra parte, debería abandonarse la idea imperante que se centra en la iniciativa del tomador-asegurado poniendo sobre su cabeza el deber de información en toda su extensión, hacia la idea de que es el asegurador quien tiene el deber de guiar la declaración del asegurado, requiriendo su respuesta con relación a lo que le interesa e importa a aquel. De manera tal que el mecanismo sería más claro en todo sentido, en virtud de que se impondría la posibilidad de que el asegurador formule el cuestionario de puntos esenciales, y el tomador tendría el deber de declarar lo requerido, permitiendo una correcta y cierta descripción del riesgo y circunstancias esenciales que hacen al futuro contrato de seguro. Otorga certeza, elimina interpretaciones y evita manipulaciones.

II.2. La necesidad de una declaración de circunstancias influyentes sobre el riesgo a través de un cuestionario suministrado por el asegurador

Existe un debate doctrinario en torno a “si las preguntas que integran el contenido del cuestionario predispuerto por el asegurador constituyen las únicas circunstancias influyentes sobre el riesgo”. Si la respuesta es afirmativa, se interpreta que las circunstancias silenciadas y que no fueron objeto de interrogatorio son irrelevantes o indiferentes para el asegurador, por lo que la reticencia no es sancionable. Si, por el contrario, la respuesta es negativa, se afirma que deben ser declaradas todas las circunstancias que influyan sobre el riesgo, aunque no integren el cuestionario. Decididamente y en consonancia con lo expuesto con relación a la reticencia, el primero de los sistemas enunciados es el que prevalece en la actualidad.

En efecto, el sistema del cuestionario se caracteriza por hallarse predispuerto, pero integrado con las preguntas cuyas respuestas interesan al asegurador. Lo cierto es que el contenido del cuestionario se constituye, en principio, en límite al deber de información, reserva hecha del deber que asume el asegurador consistente en informarse de toda circunstancia trascendente a los fines de evaluar el riesgo por afrontar⁽¹¹⁾.

El fundamento de la solución se encuentra en que el asegurador es quien conoce en su carácter de profesional cuáles son las circunstancias del riesgo que determinan la posibilidad jurídica y económica de contratar el seguro o un mejor ajuste del cálculo riesgo-prima. En consecuencia, pesa sobre él un deber de consejo que, si bien se funda en el deber de información, se diferencia de este por cuanto: a) es subjetivo; b) contiene un plus respecto de aquel; c) impone a su deudor una carga más pesada, de mayor intensidad en punto a la responsabilidad civil que le impone.

La obligación de señalar en el formulario las circunstancias relevantes del riesgo asegurado no puede pesar sino sobre el asegurador, dado su carácter profesional que ostenta frente a un profano (asegurando) que ha depositado en aquel su confianza, en la competencia que se le atribuye por el cocontratante y en el carácter habitual y no episódico de sus relaciones con terceros. En el caso, se trata de una obligación de resultado.

II.3. La prórroga de jurisdicción del artículo 16 de la Ley de Seguros

Frente a un contrato celebrado por adhesión o de consumo, el adecuado balanceo, las normas procesales que admiten la prórroga territorial en cuestiones patrimoniales y las normas referidas a la contratación en el nuevo Código y en la Ley de Defensa del Consumidor, la solución no puede ser admitir la prórroga de jurisdicción con carácter general.

En el contrato de seguro de consumo celebrado fuera del local comercial del asegurador, a distancia, con utilización de medios electrónicos o similares, la prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita (art. 1109 CCyCN).

En los contratos celebrados por adhesión, se debe someter la justicia intrínseca del pacto de foro prorrogando (como cláusula predispuerta) a un severo examen de legitimidad, en cada ocasión que el asegurado (adherente) in-

voque y acredite que la cláusula contractual que consagre la prórroga importa una efectiva privación de su derecho de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional), es decir, que menoscabe el acceso a la justicia y lesione el proceso justo constitucional.

De modo que, bajo ciertas circunstancias, la cláusula de prórroga de competencia territorial puede llegar a importar una cláusula abusiva, pero no toda prórroga constituirá un supuesto de abuso como, por ejemplo, no lo sería cuando por ella se prorrogue la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los de las ciudades satélites, donde habitan quienes trabajan en la gran ciudad, escasamente distante y con intercambio permanente. En ese sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De allí que propiciemos, fuera del ámbito del contrato de consumo a distancia, la redacción de un texto por el que se declare la admisibilidad de la prórroga de competencia territorial siempre y cuando el desplazamiento, por lo distante, no suprima, restrinja u obstaculice la defensa en juicio del asegurado.

II.4. La rescisión ante la agravación del riesgo

La Ley de Seguros (art. 37 LS) sanciona con rescisión la agravación del riesgo, sin consideración a su importancia ni a su influencia sobre la medida de la prestación a cargo del asegurador.

Sin duda, la agravación del estado de riesgo debe ser de naturaleza tal que ocasione un desequilibrio significativo con relación a los beneficios y sacrificios correspondientes a la situación original del contrato, alcanzando a influir en forma sensible en la posibilidad de producción del siniestro o en la extensión de la obligación a cargo del asegurador.

En consecuencia, se revela como necesaria la reforma del sistema vigente que omite el requisito de la importancia en la alteración del estado del riesgo, para evitar que cualquier modificación de este justifique la rescisión contractual por el asegurador.

La otra cuestión que justifica la reforma es autorizar al asegurador la revisión del contrato, proponiendo su modificación y dotando tanto a la aseguradora como al asegurado de plazos expresos para efectuar sus respectivas manifestaciones de la voluntad.

“En esta materia deben adoptarse las líneas directrices que se observan en el derecho comparado y solo posibilitar la liberación de la aseguradora para los casos que el tomador haya incurrido en esa omisión de denuncia de la agravación, con mala fe. En los demás casos, se debería mantener la cobertura y la prestación del asegurador se debe reducir proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo”⁽¹²⁾.

II.5. La sanción por falta de denuncia del siniestro o denuncia tardía

La inobservancia de la carga de denuncia del siniestro por un mero olvido (culpa) o la denuncia tardía (culpa), sin haber ocasionado perjuicio al asegurador y sin que medie, como mínimo, culpa grave o dolo del sujeto pasivo del deber, sancionada con caducidad, constituye un exceso. El legislador se apartó del Anteproyecto Halperin, que sostenía que el incumplimiento culposo daba derecho al asegurador a reducir la indemnización en la medida en que se reduciría si hubiera sido efectuada la denuncia en término.

“De allí que corresponda propiciar que el incumplimiento en término de la carga de denuncia del siniestro guarde correspondencia proporcionada con la sanción de caducidad: (a) la violación culposa de la carga por el asegurado debe facultar al asegurador a ‘reducir la indemnización en la medida del daño provocado por la tardanza en cumplirla oportunamente’, así como que (b) la infracción dolosa, obrada con ‘intención de impedir que el asegurador pueda verificar oportunamente las circunstancias en que ocurrió el siniestro’, debe liberar al asegurador”⁽¹³⁾.

(11) STIGLITZ, Rubén S., en STIGLITZ, Rubén S., COMPIANI, María Fabiana y PIEDECASAS, Miguel, “La necesidad de modificar la ley de seguros”, La Ley 31/10/2011, 3, LA LEY 2011-F, 813. Cita: TR LALEY AR/DOC/4607/2011.

(12) PIEDECASAS, Miguel A., en STIGLITZ, Rubén S., COMPIANI, María Fabiana y PIEDECASAS, Miguel, “La necesidad de modificar la ley de seguros”, La Ley 31/10/2011, 3, LA LEY 2011-F, 813. Cita: TR LALEY AR/DOC/4607/2011.

(13) STIGLITZ, Rubén S., en STIGLITZ, Rubén S., COMPIANI, María Fabiana y PIEDECASAS, Miguel, “La necesidad de...”, cit.

La sanción actual es injustificadamente severa y se aprecia como injusta, además, por lo exiguo del plazo acordado por el legislador para cumplir la carga (3 días).

En consonancia con ello, pensamos que debería reservarse la máxima sanción solo para el incumplimiento calificado por la gravedad de la conducta (culpa grave o dolo), mientras que, ante el incumplimiento culpable, el asegurador sólo tendría derecho a reclamar los daños y perjuicios en la medida en que el incumplimiento haya influido en su existencia y extensión.

Por último, no debería perderse la oportunidad tanto de ampliar el plazo de denuncia de siniestro (a 7 días) y facultar expresamente a cualquier tercero a realizar la denuncia, para facilitar el ejercicio del reclamo del tercero al asegurador en sede extrajudicial, ya que lo esencial no es otra cosa que el conocimiento suficiente y cierto que adquiera el asegurador para encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre los derechos del asegurado.

III. Corolario

La litigiosidad existente en materia de seguros, que se evidencia con relación al plazo de prescripción aplicable, al alcance del deber de información y consejo a cargo del asegurador, a la operatividad de la suspensión de cobertura automática en caso de falta de pago del premio, a la inaplicabilidad de la abusividad con relación a las exclusiones de cobertura y su sometimiento al estándar de su influencia causal con el riesgo cubierto, a la problemá-

tica de los límites del seguro en el contexto inflacionario, aconsejan la revisión de la normativa del contrato de seguro, que se suman a los tradicionales temas propios de una ley alumbrada bajo un sistema de derecho decimonónico.

La actualidad del régimen jurídico del contrato de seguro en nuestro país exhibe la influencia de un nuevo orden contractual, trazado en el Código Civil y Comercial de la Nación que ha determinado que se le apliquen tanto la normativa de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales de contratación (art. 984 CCyCN) como la fuerte tutela del contrato de consumo. Unas y otras normas tuitivas han alumbrado un nuevo paradigma del régimen jurídico aplicable al contrato de seguro: la protección del asegurado.

La situación descrita evidencia el carácter imperativo de una reforma del régimen del contrato que se adecue no solo a la nueva fisonomía de un orden contractual de protección, sino que también atienda a la pluralidad de seguros obligatorios legislados y que recoja la aparición en la realidad negocial de nuevas coberturas para riesgos no regulados.

VOCES: SEGURO - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - DAÑO - JURISPRUDENCIA - DAÑOS Y PERJUICIOS - PROVEEDOR DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - DEFENSA DEL CONSUMIDOR - CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - OBLIGACIONES - CONTRATO DE SEGUROS

La responsabilidad legal de las compañías de seguros por los actos de los productores de seguros, según la normativa vigente del Código Civil y Comercial y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

por WALDO SOBRINO(*)

Sumario: 1) PRELIMINAR: EL GENIAL ISAAC HALPERIN. – 2) EL DERECHO ES UNA IDEA PRÁCTICA. – 3) RELACIONES LEGALES DE LOS PRODUCTORES DE SEGUROS CON LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS. 3.1) VENTA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 3.2) PAGO DE LAS COMISIONES AL PRODUCTOR DE SEGUROS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 3.3) FIJACIÓN DE OBJETIVOS COMERCIALES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS A LOS PRODUCTORES DE SEGUROS. – 4) NORMATIVA VIGENTE: EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Y LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 4.1) ART. 9: BUENA FE. 4.2) ART. 367: REPRESENTACIÓN APARENTE. 4.3) ART. 732: ACTUACIÓN DE AUXILIARES. PRINCIPIO DE EQUIPARACIÓN. 4.4) ART. 883: LEGITIMACIÓN PARA RECIBIR PAGOS. 4.5) ART. 1067: ACTOS PROPIOS. 4.6) ART. 1073: CONTRATOS CONEXOS. 4.7) ART. 1753: RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE. – 5) JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 5.1) “MODERNELL GOUR, LUIS HUMBERTO C/ GÓMEZ ROBLES, LUIS MARCELO Y OTROS” (1997). 5.2) “TUERO CASO, JOSÉ LUIS Y OTRO C/ LATOYAR S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRÁN. C/ LES. O MUERTE)” (2020). – 6) CONCLUSIONES.

1) Preliminar: el genial Isaac Halperin

1.1. Cada día aumenta más nuestra admiración por dos grandes maestros que marcaron la senda del Derecho en nuestro país, como son, por un lado, nuestro querido CARLOS GHERSI y, por otro lado, el genial ISAAC HALPERIN.

NOTA DE REDACCIÓN: SOBRE el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en EL DERECHO: *Reciente plenario de la Cámara Civil y los seguros*, por CARLOS SCHWARZBERG, ED, 233-629; *Reflexiones derivadas de ciertos aspectos del siniestro y reparos doctrinarios que me aparecen de la interpretación de la Excm. Cámara en lo Comercial*, por EMILIO H. BULLO, ED, 236-1077; *Seguro de responsabilidad civil. Citación en garantía. Dirección del proceso. El depósito en pago de la suma asegurada y accesorias devengadas, ¿libera al asegurador citado en garantía?*, por CARLOS ALBERTO SCHIAVO, ED, 244-1039; *Sistema de factor de atribución en el Código Civil y Comercial*, por CARLOS A. GHERSI, ED, 267-878; *Los supuestos expresamente contemplados en el nuevo Código que eximen –total o parcialmente– la atribución de la responsabilidad*, por JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FREIRE, ED, 274-813; *Apuntes en torno a las medidas mitigadoras en el Código Civil y Comercial argentino, con especial atención a la responsabilidad civil por incum-*

plimiento contractual, por DANIEL L. UGARTE MOSTAJO, ED, 275-504; *Criterios de atribución de responsabilidad civil. Razones de su evolución desde Vélez Sarsfield hasta el Código Civil y Comercial*, por FERNANDO ALFREDO UBIRIA, ED, 277-724; *Ilegalidad de la suspensión automática de cobertura por mora en el pago de seguro*, por PABLO FERNANDO CEBALLOS CHIAPPERO, ED, 284-52, *Apuntes sobre la responsabilidad civil del productor asesor de seguros*, por MARÍA CELESTE COLOMBO, ED, 292; *La responsabilidad civil del productor asesor de seguros. Marco regulatorio aplicable*, por MARÍA FABIANA COMPIANI, ED, 296. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderechodigital.com.ar.

Como consecuencia de ello, varios artículos pensados por Halperin para proteger a los asegurados fueron modificados para beneficiar a las compañías de seguros.

Y, justamente, el tema *sub examine* referido a la *responsabilidad de las compañías de seguros por los actos*

plimiento contractual, por DANIEL L. UGARTE MOSTAJO, ED, 275-504; *Criterios de atribución de responsabilidad civil. Razones de su evolución desde Vélez Sarsfield hasta el Código Civil y Comercial*, por FERNANDO ALFREDO UBIRIA, ED, 277-724; *Ilegalidad de la suspensión automática de cobertura por mora en el pago de seguro*, por PABLO FERNANDO CEBALLOS CHIAPPERO, ED, 284-52, *Apuntes sobre la responsabilidad civil del productor asesor de seguros*, por MARÍA CELESTE COLOMBO, ED, 292; *La responsabilidad civil del productor asesor de seguros. Marco regulatorio aplicable*, por MARÍA FABIANA COMPIANI, ED, 296. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderechodigital.com.ar.

(*) Profesor de Seguros de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: waldo.sobrinow@wsya.com.ar.

(1) MORANDI, Juan Carlos Félix; *Estudios de Derecho de Seguros*, Ediciones Panneditte, Buenos Aires, 1971. Capítulo IV “Legislación de seguros en nuestro país”, p. 146, acápite 4 “Anteproyecto Halperin de 1959”; y p. 148, acápite 5 “Proyecto de 1961”.

(2) ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan; *Código de Comercio y leyes complementarias*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1979, tomo II, p. 346, parágrafo n° 1632 “Modificación de la legislación de seguros. Proyecto del Dr. Halperin y de la Comisión Revisora”, donde se señala que “... la comisión revisó el proyecto e introdujo numerosas modificaciones...” (la letra negrita es nuestra).

(3) STIGLITZ, Rubén y MORELLO, Augusto; “Régimen sancionatorio de la Ley de Seguros (Propuestas de política legislativa)”. Capítulo I “Antecedentes de la Ley de Seguros”, donde se explica que el Proyecto de Ley General de Seguros de Isaac Halperin fue objeto de distintas modificaciones de la Comisión Asesora, Consultiva y Revisora, y de una subcomisión que se creó al efecto; publicado en *Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, La Ley, tomo 2007, p. 1, mayo de 2008.